

EL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA ENTRE CONSERVADORES Y LIBERALES. DEBATES SOBRE LA GOBERNANZA AMBIENTAL CANADIENSE POR LA CONSTRUCCIÓN DE OLEODUCTOS

Claudia Anait Ocman Azueta

Introducción

Durante los gobiernos de Stephen Harper y Justin Trudeau el movimiento ambientalista, como actor de la gobernanza ambiental, permitió visualizar la dinámica sobre la cual ésta se construyó. En medio del debate por la aparente confrontación entre una estrategia que para impulsar el desarrollo apostó por la construcción de oleoductos y la protección ambiental, de una política restrictiva que condujo a la securitización de los ambientalistas se transitó hacia otra que osciló entre la retórica y el pragmatismo.

Con la intención de destacar las posturas que orientan el debate de los ambientalistas con el gobierno federal, el capítulo contextualiza la controversia sobre la que esta discusión se cimentó, con la finalidad de determinar y esclarecer sus fundamentos en el marco de la (des)gobernanza ambiental establecida en ambos periodos de gestión, señalando que esta contraposición de intereses contrarresta y determina la política estatal en un país donde el movimiento ambientalista es relevante. Consecuentemente, el capítulo describe, aunque de manera general, a los actores involucrados, las acciones que emprendieron y sus contradicciones, a partir de la gestión completa de Harper como primer ministro y hasta la primera de Justin Trudeau, resaltándose el papel que desempeña el movimiento ambientalista como grupo de presión o de reforzamiento-afianzamiento político ante los proyectos de extracción de petróleo de arenas bituminosas y la protección ambiental en correlación con los derechos a la salud y al medioambiente sano, y con la política climática internacional.

Contextualización

Comúnmente, la imagen que Canadá ha proyectado al exterior es la de un país ambientalista que cuenta con políticas y normatividades progresistas para proteger el entorno natural en equilibrio con su desarrollo económico. Contrariamente a esta imagen, en lo doméstico las acciones emprendidas en favor del desarrollo y el crecimiento estatal han impactado en la percepción social de la política pública por la forma en que desde el gobierno se conduce y se proyecta la gobernanza ambiental.¹

En Canadá, dirigida ya sea por conservadores o por liberales, la gobernanza ambiental se ha construido con base en las políticas, normatividades, instituciones y las dinámicas que se establecen entre sus actores. En tales dinámicas quedan incluidas las facultades que corresponden, en la materia, a cada nivel de gobierno, así como las interacciones entre éstos y los actores no estatales.

Como actores no estatales del movimiento ambientalista se identifica a aquellos miembros de la sociedad civil que de manera colectiva, o no, emprenden acciones para proteger el medioambiente; destacan las organizaciones no gubernamentales ambientalistas (ONGA),² que han sido relevantes para la dirección que adopta la gobernanza ambiental al dar muestra de aquellos aspectos que la caracterizan. Al convertirse en actores políticos, los ambientalistas, en especial estas organizaciones, han contribuido en la formulación, adopción y modificación de políticas y regulaciones. También han influido en las posturas que se adoptan tanto en la política ambiental nacional como en la internacional.

¹ La gobernanza ambiental puede aludir a la suma de “reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones que configuran la manera en que las personas interactúan con el medioambiente” (UNEP, 2017). En sí, es un proceso que implica la gestión para la protección ambiental, cuya dinámica depende de cómo sea conducida tal gestión por las políticas, las regulaciones y por las instituciones, de lo que deriva la interacción con actores privados, estableciéndose diferentes tipos de gobernanza, la cual idealmente debiera ser abierta, permitiendo la participación ciudadana para ajustar intereses, lo que supone un tipo de gobernanza horizontal, no vertical, pues en este último las decisiones se tomarían de manera cerrada.

² En congruencia con los fines de este capítulo, se utilizarán los términos “movimiento ambientalista” o “ambientalistas” para agrupar, y en general para referirnos al movimiento en favor del medioambiente opuesto a los oleoductos durante los periodos de gestión de Stephen Harper y Justin Trudeau. Sin descartar que existen estudios que los clasifican, con base en sus fundamentos ideológicos, en ecologistas, ambientalistas y conservacionistas.

En Canadá, el movimiento ambientalista encuentra sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del XX. Con una línea de acción inicial que se concentraba en la conservación y en la defensa de un uso no exhaustivo de los recursos naturales, y en especial en la protección de bosques, lagos y de la vida silvestre, el movimiento iría evolucionando debido a factores tales como el aumento de la contaminación, el impacto ambiental por acción antropogénica, la influencia del movimiento ambientalista estadounidense, así como por las políticas conducentes para el desarrollo económico. La segunda mitad del siglo XX detonaría un incremento y una mayor participación e incidencia de las ONGA en la política ambiental, la cual se intentó redirigir poniendo el énfasis en la vinculación entre la seguridad humana y la protección ambiental.

El incremento y el activismo de algunas ONGA de origen canadiense, así como de otras que ubicadas en Estados Unidos se extendieron a Canadá, y su consecuente influencia en los procesos de la gobernanza ambiental global, regional y provincial, ayudarían a transmitir la imagen de un país interesado en proteger y conservar la naturaleza. De este modo, la labor de los ambientalistas propiciaría encuentros y desencuentros con el gobierno, contribuyendo así en el diseño de políticas públicas orientadas a mitigar los impactos ambientales del sector productivo, en particular del industrial.

La participación de Canadá en el régimen internacional de cambio climático y la ratificación del Protocolo de Kioto en 2002, de alguna manera marcaban una línea de acción estatal ambientalista encauzada por el gobierno liberal de Jean Chrétien (1993-2003), que sería cuestionada en periodos posteriores, como en los correspondientes a Stephen Harper y Justin Trudeau, lo que ocasionó el surgimiento de un importante debate entre el gobierno federal y los ambientalistas.

Desde que Stephen Harper asumió el cargo de primer ministro, en 2006, quedó claro que la pieza central de su gobierno para impulsar el desarrollo del país estaría centrada en la explotación de los recursos naturales, en especial de las fuentes de energía fósil, y que la protección del medioambiente no era un tema esencial. De hecho, desde su perspectiva la protección medioambiental podía obstaculizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los canadienses, al alterar la estabilidad de la estrategia para el desarrollo.

Desde la óptica del Partido Conservador, la política ambiental no era otra cosa que un instrumento de control que no permitía el crecimiento del Estado-nación, al limitar las actividades industriales y empresariales. Por ello,

se imponía disminuir el alcance de los instrumentos de dicha política, al menos los de corte jurídico, administrativo y social,³ para entonces impulsar el desarrollo y el crecimiento económico, elementos que, en todo caso, justificaban los potenciales impactos al medioambiente.

Si bien las dos primeras gestiones de Stephen Harper no fueron tan intensas en materia ambiental por el carácter minoritario de su partido —como sí lo fue su mandato de mayoría a partir de 2011—, el primer ministro siempre mantuvo una crítica hacia la política ambiental tradicional canadiense, por considerarla demasiado rígida y dañina para la economía. Mientras tanto, en sus dos gobiernos de minoría, de 2006 a 2008 y de 2008 a 2011, Harper mantuvo la búsqueda de espacios para deslindar al desarrollo económico de las normatividades para la protección ambiental.

A pesar de que en su agenda electoral para su segundo periodo al frente del Estado, de 2008 a 2011, Harper propuso hacer de Canadá una potencia en la generación de energías limpias, líder en la protección de los recursos naturales para asegurar el bienestar de los canadienses y reforzar el marco jurídico normativo para la conservación de la Tierra y sus recursos y el cuidado de la salud humana frente a la contaminación (Partido Conservador, 2008), ya cuando obtuvo un gobierno de mayoría, en su tercer periodo, a partir de 2011, la situación se modificó.

Mediante la *Jobs Growth and Long-term Prosperity Act, Bill C-38*,⁴ además de retirar a Canadá del Protocolo de Kioto a finales de 2011 por considerarlo “un esquema socialista para absorber recursos de la riqueza de las naciones productivas” (Struzik, 2012), el gobierno federal y su primer ministro se centraron en abrir una brecha en la gobernanza ambiental por medio de varias medidas, que agrupadas darían cuenta de un proceso verticalizado de desregulación⁵ de la toma de decisiones, así como de la falta de transparencia

³ Los instrumentos jurídicos atañen al conjunto de normas y disposiciones legales; los administrativos a las evaluaciones, controles, autorizaciones y regulaciones, y los sociales son los que se dirigen a concientizar a la sociedad con educación, información y exhortos a la participación (Ramírez y Ramírez, 2014: 74).

⁴ Ley de Crecimiento del Empleo y la Prosperidad de Largo Plazo.

⁵ Adoptada en 2012, esta disposición limitó, entre otros aspectos, la protección a las especies amenazadas; favoreció la comercialización en lugar del cuidado de los recursos pesqueros; restringió los informes sobre los parques nacionales, sobre la política climática y las evaluaciones de impacto ambiental a los proyectos considerados de relevancia para el desarrollo, sin que las últimas ya fueran requeridas para aquéllos con inversión del gobierno. También se ampliaron los permisos para verter residuos en el mar (Ecojustice, 2012; McDonald, 2013; Struzik, 2012).

con el fomento a la desinformación y el establecimiento de limitaciones a la participación ciudadana.

Al recorte del presupuesto para la investigación sobre las condiciones ambientales, la biodiversidad, los recursos naturales o sobre el cambio climático, se añadió la restricción a la consulta pública, el cierre y recorte de presupuesto a órganos consultivos, centros de investigación e instituciones, así como a programas de investigación del propio gobierno.⁶ La vigilancia y censura a las ONGA y a los científicos e investigadores que pudieran proporcionar información sobre la situación medioambiental de Canadá,⁷ los subsidios a la industria energética, la explotación con mayor intensidad de las arenas bituminosas en la provincia de Alberta, el impulso a la construcción y extensión de oleoductos, la extracción de minerales, así como la producción de gas con el método de *fracking*, terminaron por desdibujar la tradicional política ambiental canadiense.

Con la *Bill C-38* se sentaron las bases para desafiar el desarrollo sostenible con una estrategia centrada en la política económica para procurar el bienestar social, de manera que para el gobierno de Harper las acciones en contra de tal política representaban una amenaza a la seguridad nacional.

A diferencia de Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama estableció una mesa de diálogo con los opositores a la extracción de petróleo de arenas bituminosas y a la construcción de oleoductos, con la finalidad de construir así una línea de acción propositiva frente al cambio climático, Stephen Harper securitizó el movimiento ambientalista, y en esta dirección emprendió una vigilancia extrema, a través de las agencias de seguridad del Estado, para controlar las disidencias contrarias a los proyectos de desarrollo, en especial a los relacionados con la construcción y extensión de los oleoductos.

Las medidas implementadas por Harper generaron un problema de relaciones públicas que derivó en un debate que se extendió al interior del gobierno

⁶ Entre los centros de investigación se encuentran la Mesa Redonda Nacional sobre Medioambiente y Economía (National Round Table on the Economy and the Environment), encargada de diseñar políticas sobre desarrollo sostenible; la Fundación Canadiense para las Ciencias Climáticas y Atmosféricas (Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences), y entre las dependencias del gobierno, los ministerios del Medioambiente (Environment Canada) y el de Pesca y Océanos (Fisheries and Oceans Canada) (Struzik, 2012).

⁷ El gobierno de Harper prohibió a los científicos e investigadores proporcionar información a la prensa sin permiso previo, cerró bibliotecas como la del Departamento de Pesca y Océanos y eliminó bases de datos (McDonald, 2013).

federal, creándose divisionismos entre sus propias instituciones, los miembros del Parlamento y los del gabinete, por ejemplo entre los ministerios de Finanzas, de Recursos Naturales y de Medioambiente. También algunos miembros del Partido Liberal y del Partido Verde organizaron frentes políticos de contención a las medidas del primer ministro conservador.

De este modo, los actores involucrados en el debate fueron clasificados como grupos propetróleo⁸ y grupos ambientalistas.⁹ En términos coloquiales, tal clasificación concernía, en el caso de los primeros, a la industria extractiva, mientras que, en el de los segundos, a las ONGA, que como asociaciones organizadas tenían mayor presencia, pero en general a todos aquellos que, en favor del medioambiente, se oponían activamente a los oleoductos.

Los ambientalistas y la emergencia de Canadá como superpotencia energética durante la administración de Harper

Si consideramos que Canadá cuenta con una de las reservas mundiales de petróleo más importantes, y que la mayor parte de esos recursos no se explotaban, también es cierto que desde el principio de su primera gestión como primer ministro la intención de Stephen Harper fue convertir al país en una superpotencia emergente en energía. En este tenor, aunque se impulsaron asimismo las energías alternativas, como la proveniente de los biocombustibles, en lo general se trazó una estrategia encaminada a explotar los depósitos de bitumen de la provincia de Alberta.

En este sentido, el gobierno federal y los gobiernos provinciales,¹⁰ en conjunto con la industria petrolera, emprendieron y promovieron proyectos para proveer de petróleo a terceros países, enfocándose en el mercado asiático y en el de Estados Unidos. La estrategia consistió en construir y en ampliar oleoductos, lo cual desencadenó una de las disputas políticas más álgidas

⁸ Identificado como neoliberal y conservador, el grupo propetróleo integra a asociaciones de la industria petrolera como la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (Canadian Association of Petroleum Producers, CAPP) y la Asociación Canadiense de Oleoductos de Energía (Canadian Energy Pipelines Association, CEPA).

⁹ En los medios de comunicación y por el gobierno también son identificados como verdes, ambientalistas o activistas ambientales.

¹⁰ Los de Alberta, Saskatchewan y Nuevo Brunswick.

que hayan tenido lugar, situándose en medio de la polémica los oleoductos Keystone XL, Enbridge Northern Gateway, Energy East y Trans Mountain.

Ubicadas en un momento —principios de la segunda década del siglo XXI— en el que en Canadá se presentaba una tendencia a favor de la protección ambiental y de poner mayor atención a las implicaciones globales y locales de los procesos de extracción y transportación del petróleo, las discrepancias de las organizaciones ambientalistas con las políticas de Harper fueron creciendo, al mismo tiempo en que los grupos organizados de las Primeras Naciones se sumaron a esta dinámica de protesta por la incursión de compañías privadas en sus territorios.

Desde lo global, el seguimiento de la política climática internacional delimitada por el Protocolo de Kioto era relevante para los ambientalistas que residían en Canadá y también para aquéllos fuera del país. En lo local, adicionalmente al cambio climático, entre los argumentos de los ambientalistas resaltaban las repercusiones de la industria petrolera en los bosques boreales, en los pantanos de turba bajo los que se sitúan las arenas de alquitrán, en la biodiversidad por posibles derrames en los hábitats, en la contaminación y desvío de los sistemas fluviales o en la desprotección a las especies amenazadas. También a estos grupos ambientalistas canadienses les preocupaban las acciones del gobierno federal para controlar la difusión de información sobre los impactos ambientales ocasionados por la industria extractiva.

Dadas las implicaciones globales y locales de los oleoductos, durante los periodos de Stephen Harper y Justin Trudeau la controversia con los ambientalistas se desarrolló en varios niveles, incluyendo el provincial, el nacional, el transnacional y el internacional, con la discusión respecto de la política climática como un elemento más común en los últimos tres niveles.

La propuesta de construir el oleoducto Keystone en 2005, por parte del corporativo TransCanada, alimentó la controversia entre estos grupos. Si bien, la primera rama de este oleoducto avanzó hasta funcionar en 2010, una segunda rama propuesta en 2008, nombrada como Keystone XL, cuyo propósito se centraba en transportar bitumen diluido de Hardisty en Alberta —y petróleo de esquisto de Dakota del Norte y Montana— al complejo industrial Houston-Galveston en Texas (Sparrow, 2014), avivaría las protestas y manifestaciones.

A partir del descontento inicial de grupos de granjeros en Nebraska, puesto que el oleoducto atravesaría un acuífero local, las mayores protestas se

centrarían en la generación de emisiones con efectos en el cambio climático,¹¹ lo que en el caso de Keystone XL fungiría como un mecanismo de presión para el gobierno estadounidense.

Consecuentemente, mientras que en 2011 el Departamento de Estado de Estados Unidos postergaba la aprobación de la extensión de este oleoducto para evaluar su pertinencia por las emisiones de dióxido de carbono y sus posibles efectos para la imagen de Obama, el gobierno de Harper insistía en su aprobación y en separar al desarrollo económico de la protección ambiental y, por ende, de la política climática.

El debate con los ambientalistas giraría posteriormente en torno a la separación de Canadá del Protocolo de Kioto, así como alrededor de los impactos ambientales globales y locales que podría provocar la construcción de otros oleoductos, y en consecuencia también en la implementación de las políticas y normatividades para favorecerlos.

En medio del posible rechazo a la construcción del oleoducto Keystone XL por el gobierno de Obama,¹² Harper propició varios desencuentros con ONGAS de origen canadiense que como la Fundación David Suzuki y The Council of Canadians se manifestaban incluso en la Unión Americana para evitar la aprobación del proyecto. Asimismo, otras como Sierra Club y Natural Resources Defense Council, con base en Estados Unidos, se extendieron a Canadá aliándose con otras ONGA, otros activistas de la sociedad civil, e incluso con las Primeras Naciones, creando así frentes de defensa transnacionales contra los oleoductos. También deben considerarse movimientos internacionales como el de la organización 350.org, dirigidos a eliminar el uso de combustibles fósiles y a promover el uso de energías renovables.

Como parte de una tendencia generalizada que se presentaba en contra de los proyectos de extracción de petróleo y de gas, y no únicamente para combatir al Keystone XL, el movimiento opositor a los oleoductos terminó por ser identificado como un movimiento antipetróleo, y como uno que al ser de índole transnacional e internacional sentaba sus bases en la política climática.

¹¹ Se calculó que el oleoducto incrementaría en 22 000 000 de toneladas al año la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) (Patterson, 2017).

¹² Estados Unidos canceló el proyecto en 2015. En 2017 Donald Trump firmó su reactivación con el beneplácito público de Justin Trudeau.

De acuerdo con Greenpeace, en el reporte *Protected/Canadian Eyes Only*¹³ del 24 de enero de 2014, la Real Policía Montada de Canadá señalaba que este movimiento estaba integrado por “un creciente, numeroso, organizado y bien financiado grupo antipetróleo integrado por asociaciones de activistas pacíficos, militantes y extremistas violentos opuestos a la dependencia de la sociedad en los combustibles fósiles” (McCarthy, 2015). Sus argumentos para oponerse a los oleoductos, adicionales a los relativos al cambio climático, se centraron en los impactos ambientales de carácter local, con énfasis en los riesgos de derrames en las fuentes de agua y en los hábitats de especies, la destrucción de bosques y humedales, en la contaminación derivada de la extracción y transportación de petróleo de las arenas bituminosas, en la falta de diversificación de las fuentes energéticas, y en la afectación a los derechos a la salud y al medioambiente sano, así como en general a los derechos de los pueblos aborígenes.

En la interfase de la negociación con Estados Unidos para la construcción del oleoducto Keystone XL, para diversificar los mercados energéticos y disminuir la dependencia hacia este país, y con la mira puesta en el mercado asiático, se presentó la opción de construir desde Alberta y hasta la costa de Columbia Británica el oleoducto Enbridge Northern Gateway.¹⁴ En este periodo también se propusieron los oleoductos Energy East¹⁵ y Trans Mountain.¹⁶ De

¹³ Protegido/Sólo para ojos canadienses.

¹⁴ Destacan en esta negociación los argumentos provenientes de las Primeras Naciones de Columbia Británica, las que aludieron a daños imputables a sus tierras ancestrales, en las cuencas del salmón, a los hábitats del caribou, al Great Bear Rainforest (Bosque Lluvioso del Gran Oso) y al río Fraser, por posibles derrames de petróleo. La discusión sobre este oleoducto se agudizaría debido a su aprobación en 2014, independientemente de los beneficios económicos a la población y a Columbia Británica promovidos por el gobierno federal.

¹⁵ Atravesar el territorio de ciento ochenta pueblos aborígenes, poner en riesgo los suministros de agua dulce localizados en Winnipeg, North Bay, Ottawa, Montreal y Saint John, así como amenazar el hábitat de las ballenas Beluga, todos fueron aspectos que dieron margen a las protestas contra el oleoducto Energy East, propuesto en 2013 y cancelado en 2017 por la empresa Trans-Canada; no obstante, además de por estas causas ambientales, también asociadas con las emisiones de carbono, a la suspensión del proyecto también contribuyeron las revisiones más estrictas encauzadas por el gobierno de Trudeau en 2016 y el menor costo del petróleo en el mercado internacional (Gatehouse, 2019).

¹⁶ Propuesto en 2013 por el corporativo Kinder Morgan, aprobado en 2016 y adquirido en 2018 por el gobierno federal, el debate sobre este oleoducto se cimentó en los daños a la biodiversidad, en la transgresión a las costumbres, tradiciones y economías de subsistencia de los pueblos aborígenes, a su salud y a la de los pobladores circundantes, que pudiesen derivar por causa de gases tóxicos y vertimientos en acuíferos que proveen de agua dulce a ciudades como Chilliwack y Abbotsford, en Columbia Británica, o bien, por los potenciales derrames y por el incremento del ruido y el tráfico debidos a la transportación del petróleo, que podían afectar a

la misma manera que con el Keystone XL, estos tres no quedaron exentos de la renuencia descrita hacia los proyectos de extracción de hidrocarburos.

Al no cruzar fronteras, las protestas de los ambientalistas en torno a estos oleoductos —mismas que continuarían en el periodo de Justin Trudeau— se centraron más en los impactos locales al medioambiente, con énfasis en su desprotección amparada por los cambios normativos implementados desde el gobierno central, que se caracterizaban por su menor rigurosidad en la aplicación de evaluaciones de impacto ambiental. Pronto esos movimientos ambientalistas encontraron en los grupos nativos canadienses a unos firmes aliados dispuestos a movilizarse para defender su patrimonio cultural.

Las implicaciones ambientales globales y locales de los oleoductos Enbridge Northern Gateway, Energy East y Trans Mountain involucraron a las ONGA con otros grupos de mayor alcance y diferentes niveles, como Greenpeace, ForestEthics, Sierra Club, Friends of Wild Salmon, The B. C. Federation of Naturalists, A. B. C. Environmental Activist Group, The Dogwood Initiative, Stand.earth, Council of Canadians, The Conservation Council of New Brunswick, Energy and Climate Justice, 350.org., LeadNow y Equiterre (Hoekstra *et al.*, 2015).

Una vez detenida la construcción del oleoducto Keystone XL, al no ser aprobado por el gobierno de Estados Unidos, y dado el interés de Ottawa en proyectar a Canadá como una potencia energética en el mercado mundial, la administración de Harper endurecería sus acciones en contra de los grupos ambientalistas, calificándolos como grupos radicales que atentaban contra el desarrollo económico del país y de los canadienses. Por ello mandó realizar auditorías más detalladas e incrementar su vigilancia.

Debe señalarse que estos choques con los movimientos ambientalistas por los oleoductos repercutieron en la comercialización del petróleo en el mercado asiático y en la Unión Europea y Estados Unidos —principales destinos de la producción petrolera canadiense—, pues en esas regiones y países existía oposición local a la importación de petróleo extraído de arenas bituminosas, por sus impactos ambientales globales y locales.

especies de aves y mamíferos marinos del fiordo costero Burrard Inlet y del río Fraser (Sacred Trust Initiative, 2020).

AUDITORÍAS

A finales del periodo de Harper como primer ministro, las ONGA¹⁷ fueron objeto de auditorías por la Canada Revenue Agency (CRA).¹⁸ En 2012, año en el que el gobierno federal identificó al movimiento ambientalista como una amenaza terrorista, el Pro-Tar Sands Ethical Oil Group¹⁹ promovió una campaña para exhibir a sus activistas como radicales.²⁰ Esta estrategia incluyó alegatos en contra de Tides Canada, la Fundación David Suzuki y Environmental Defence (Bagley, 2014), que condujeron a que el Ministerio de Finanzas investigara el involucramiento de las ONGA en acciones de lavado de dinero y en actividades proselitistas, con base en la reglamentación existente que establece que en Canadá las organizaciones de beneficencia²¹ sólo pueden dirigir como máximo el 10 por ciento de sus fondos a actividades políticas (Tsao *et al.*, 2015: 15).

En ese momento, el debate se centró en el descontento hacia los ambientalistas que obstaculizaban los beneficios que —a juicio del gobierno de Harper— traerían consigo los proyectos de los oleoductos. También en torno a las sospechas del gobierno federal sobre un posible intervencionismo de grupos extranjeros de corte “radical y/o extremista”, particularmente estadounidenses, que al financiar movimientos en contra de proyectos de explotación de petróleo y de gas intervenían en la soberanía de Canadá, socavando su interés en diversificar sus mercados (Paris, 2012a).

Para Joe Oliver, ministro de Recursos Naturales, la estrategia de acción de los ambientalistas consistía en imponer una agenda ideológica radical,

¹⁷ En 2014, las ONGA enlistadas para auditar fueron la Fundación David Suzuki, Tides Canada, West Coast Environmental Law, Pembina Foundation, Equiterre, The Ecology Action Centre y Environmental Defence (Salomon y Everson, 2014).

¹⁸ Agencia Tributaria de Canadá.

¹⁹ Grupo Pro Arenas Bituminosas Petróleo Ético. Este grupo, fundado por Alykhan Velshi, es una organización no gubernamental con origen en Alberta que se autodescribe como una comunidad en línea destinada a empoderar a los activistas en defensa de las arenas bituminosas (Salomon y Everson, 2014). Se concentra en descartar el vínculo entre las actividades antropogénicas y el cambio climático con argumentos basados en el libro *Ethical Oil* (Petróleo ético), de Ezra Levant.

²⁰ Para el gobierno federal estos grupos están representados por todos aquellos que se oponen a los proyectos de explotación de los recursos naturales, como petróleo, gas, bosques y minería, así como a las presas hidroeléctricas.

²¹ Identificadas como *environmental charities* o *environmental nonprofits* (beneficencias ambientales), las ONGA fueron objeto de las auditorías.

para lo cual utilizaban las consultas públicas y los fondos de grupos extranjeros con interés en debilitar la economía de Canadá y así retrasar la construcción de los oleoductos. Estos grupos se apoyaban en figuras populares para tratar de convencer a los canadienses de no explotar sus recursos naturales, y como última táctica interponían demandas para retrasar los proyectos de explotación de los mismos con la intención de detenerlos lo más posible hasta que fueran económicamente inviables (Babad, 2012).

Para Harper era sin duda inapropiado que las organizaciones de beneficencia —que recibían recursos de los contribuyentes— estuvieran en contra de la política del gobierno, por lo que había que eliminarlas (Struzik, 2012). Desde el otro punto de vista, el gobierno evitaba arbitrariamente la participación ciudadana en las consultas para la aprobación de los oleoductos²² (Babad, 2012).

Para controlar la disidencia, en 2014 la Canada Revenue Agency efectuó auditorías a varias ONGA que difundieron información sobre los impactos ambientales de la extracción de petróleo de las arenas bituminosas y que participaron en los movimientos que obstaculizaron la construcción de los oleoductos Keystone XL y Northern Gateway. Estos hechos fueron, precisamente, los que provocaron las auditorías y la decisión de establecer una mayor vigilancia a las ONGA nacionales. Así, resultaba evidente que el gobierno federal venía vigilándolas desde tiempo atrás, por lo que, de acuerdo con Tom Flanagan —ideólogo del movimiento conservador canadiense y asesor cercano de Stephen Harper—, tachar a los ambientalistas de radicales y catalogarlos como una amenaza para la seguridad nacional era parte de una estrategia para asegurar la construcción y extensión de los oleoductos (Paris, 2012b).

EL MOVIMIENTO CANADIENSE ANTIPETRÓLEO Y LA SEGURIDAD NACIONAL

Ante las protestas ciudadanas, el gobierno federal se ocupó de redirigir la estrategia de seguridad nacional para proteger los proyectos de los oleoductos. Tras una reestructuración del aparato de seguridad construido a partir del ataque del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos se monitorearon las

²² E incluso lo hacía para los proyectos forestales y mineros.

protestas ciudadanas en contra de los proyectos de extracción de recursos, con atención en los oleoductos.²³ Para Richard Fadden, director del Canadian Security Intelligence Service (CSIS), por estar el gobierno federal más preocupado por el terrorismo doméstico la mayor parte del espionaje se realizaba en el interior del país, siguiéndose sobre todo aquellos casos que se creía podían incurrir en actos terroristas (Leahy, 2013).

A partir de esta lógica, en 2015 Harper, adicionalmente a las auditorías, extendió la aplicación de la *Anti Terrorism Act (Bill C-51)* a los opositores a su estrategia para el desarrollo,²⁴ con lo cual se incrementó la supervisión a los ambientalistas, en especial a las ONGA con mayor alcance. Tal es el caso de Greenpeace, por difundir información sobre los efectos de la extracción de petróleo para el cambio climático (Leahy, 2013).

A pesar de transgredir los derechos de libertad de expresión y libertad de participación, una vez aprobada la *Bill C-51* se extendieron las facultades del CSIS para que recabará información e interrumpiera movimientos opositores que pudieran promover la desobediencia civil y actos criminales, incluso con arrestos preventivos, y para que evitará la difusión de información que pudiera desestabilizar financiera y económicamente a Canadá, o dañar su infraestructura crítica. Con fundamento en una interpretación de la seguridad nacional, que incluía a esta infraestructura, las protestas de los ambientalistas fueron catalogadas como acciones terroristas en contra del Estado y, consecuentemente, como amenazas a la seguridad nacional.²⁵

Cabe señalar que como infraestructura crítica se consideró, entre otras, a las instalaciones, redes, servicios, equipos físicos y de tecnología de la información cruciales para la salud, la seguridad y la prosperidad de las que dependen los canadienses (Public Safety Canada, 2020). De este modo, los oleoductos fueron considerados parte de dicho tipo de infraestructura, de manera que para finales del gobierno de Harper la *Bill C-51* representó una alternativa para controlar los movimientos en su contra.

²³ De acuerdo con la prensa, Greenpeace obtuvo documentos de la empresa Edelman en los que consta un plan para investigar a los opositores al oleoducto Energy East (Sorensen, 2015).

²⁴ Esta Ley aplicaba a cualquier ciudadano o grupo que para el gobierno federal cometiera actos disidentes. Aunque la supervisión se venía realizando previamente a la *Bill-C51*, quedó oficializada a partir de su publicación.

²⁵ Para Harper, los extremistas (hacía referencia a los grupos mencionados en el reporte *Protected/Canadian eyes only*) podían estar motivados por posturas islámicas radicales, por lo cual se los catalogaba como grupos criminales (McCarthy, 2015).

Sin embargo, la inestabilidad en los precios del petróleo, el rechazo a la construcción del oleoducto Keystone XL por el gobierno de Obama y la amplia difusión de que la extracción de petróleo de arenas bituminosas constituye un proceso altamente contaminante —lo cual impactó en la reputación internacional de Canadá ante la política climática internacional— provocaron incertidumbre respecto del futuro de las reservas energéticas de Alberta, generándose una mayor oposición interna a la visión de superpotencia energética de Harper.

Según Greenpeace, la inclinación de Harper hacia los intereses de la industria petrolera ocasionó que los canadienses dejaran de creer en que el apoyo del gobierno federal a esta industria formaba parte de un proceso justo, y que su plan de construir 10 000 millas de oleoductos en el este, oeste y sur de Alberta, donde se localiza la mayor parte de petróleo del país, no se hiciera realidad (Jacques, 2017).

Trudeau, entre la protección ambiental y el crecimiento económico

Como parte de su primera plataforma política, una vez alcanzado el triunfo electoral en 2015 Justin Trudeau buscó romper con las controversias suscitadas durante el gobierno de Harper, e intentó un acercamiento con los ambientalistas. Esto implicó diseñar un plan de acción que conjugara la protección ambiental con el crecimiento económico, mediante el cual se pudieran aprovechar los recursos naturales para un bienestar sostenible. Para ello, se requería eliminar las medidas previamente implementadas con el fin de evitar choques con los activistas en defensa del medioambiente, así como crear un entorno de credibilidad, confianza y transparencia que diera muestra de una gobernanza ambiental en la que los ciudadanos serían considerados al momento de plantear las políticas y las normatividades en la materia y, sobre todo, al emprender proyectos de desarrollo.

En esta dirección, como parte de su plataforma el Partido Liberal señalaba que durante el gobierno de Harper el medioambiente había sufrido reveses debidos a su desprotección, mediante el recorte de los fondos a la investigación científica, el desdén por la política climática, la vigilancia a las ONGA y, en general, a los activistas ambientales contrarios a la política del gobierno;

en suma, le reprochaban al primer ministro conservador haber dejado de lado las acciones mínimas indispensables para un futuro verde.

Para sustentar sus posiciones, en 2015 el Partido Liberal dio a conocer un documento que denominó *Real Change. A New Plan for Canada's Environment and Economy*,²⁶ en el que la relación entre medioambiente y economía se condensó en dos puntos: crear trabajos verdes y proteger el medioambiente. Una relación que específicamente quedó representada en los objetivos de emprender acciones relativas al cambio climático; invertir en tecnologías alternativas y propiciar la inversión y los trabajos limpios; restaurar la credibilidad en las auditorías ambientales; preservar y promover los parques nacionales, y proteger los océanos y el agua (Partido Liberal, 2015), aspectos que derivarían en medidas concretas.

Aunque en esos momentos el Partido Liberal no tenía un plan totalmente definido, sus propuestas resultaron en una eventual nueva fase, producto de una distinta percepción pública, en la que obtuvo el visto bueno incluso de algunas ONGA que se habían opuesto a la estrategia para el desarrollo económico de Stephen Harper. Sin más, ello no significaba inclinarse hacia el ambientalismo, sino más bien no favorecer una tendencia concreta, ni por el medioambiente ni por la economía. Al reconocer los errores de las acciones del gobierno anterior, Justin Trudeau apoyó la idea de que no se podía elegir entre el desarrollo, el crecimiento económico y la protección ambiental, sino que era preciso establecer una sinergia para obtener los mejores beneficios y actuar en esa dirección.

No obstante que en ocasiones se daba muestra de una política con cierta inclinación hacia el ambientalismo, ésta no derivó en la prohibición de la extracción de los recursos fósiles. Adicionalmente, Trudeau dispuso eliminar las auditorías y la supervisión a las organizaciones de beneficencia, lo que incluyó a las ONGA, reestablecer los fondos para la investigación científica en cambio climático y, en general, impulsó que las evaluaciones de impacto ambiental fuesen procesos precisos y, desde luego, alentó el retorno de la regulación para la protección ambiental²⁷ con la idea de resarcir los daños causados por los oleoductos. De este modo, Trudeau buscó marcar diferencias claras respecto de su antecesor, para así no afectar a la industria petrolera, que seguía su propio curso.

²⁶ “Cambio real. Un nuevo plan para el medioambiente y la economía de Canadá”.

²⁷ Las normatividades que revisaría fueron las siguientes: *Canadian Environmental Assessment Act*, *National Energy Board Act*, *Fisheries Act* y *Navigation Protection Act*.

En los hechos, todo lo anterior se tradujo en una política que no satisfizo a los ambientalistas, quienes no dejaron de señalar la falta de emprendimiento y aterrizaje de las promesas de campaña en las medidas que se estaban ejecutando. Su postura fue que no se podía tener una política climática en ciernes, habilitar las evaluaciones de impacto ambiental, así como las consultas para la obtención del consentimiento fundamentado previo de las Primeras Naciones por la explotación de recursos naturales en sus territorios, ni proteger especies y ecosistemas, con enmiendas legislativas, y al mismo tiempo fomentar la extracción de petróleo y aventurarse a los riesgos de su transportación.

RETORNO A LA SEGURIDAD, A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SUSPENSIÓN DE AUDITORÍAS

Procurar la complementariedad entre la política económica y la ambiental, sobre todo si se considera un futuro sostenible, es una aspiración ideal, y el Partido Liberal intentó promover esta dinámica desde que regresó al poder a finales de 2015. Empero, las acciones del gobierno de Trudeau no manifestaron una firme convicción para dar un giro diferente a la política de explotación y traslado de energéticos, tal y como lo muestra su aliento a los proyectos de construcción y extensión de oleoductos.

En vísperas de la primera contienda electoral, y después de haber apoyado la *Bill C-51*, el Partido Liberal se comprometió a enmendar esta disposición mediante la promulgación de una nueva legislación que propusiera efectuar cambios relevantes a la normatividad de la seguridad nacional. Si partimos de que los gobiernos tienen como responsabilidad salvaguardar los derechos y las libertades de sus ciudadanos, en 2017, con la *Bill C-59* o *National Security Act*, se proyectó, entre otros varios aspectos, una gobernanza ambiental participativa y permisiva, en la que las consultas ciudadanas contribuirían decididamente a sentar las bases de las políticas y de las reglamentaciones.

De la misma manera que con otras iniciativas de ley, como la *Bill C-69* o *Impact Assessment Act*, coloquialmente conocida como la “Ley No Más Oleoductos”, que establecía que las evaluaciones de impacto ambiental se realizarían como procesos estrictos, y al mismo tiempo proponía regresar a la regulación para la protección ambiental —mediante modificaciones a lo

dispuesto por la *Bill C-38* y la *Bill C-59*—, es que se pudo liberar a las ONGA de las auditorías ordenadas por el gobierno de Harper y deslindarlas de representar una amenaza a la infraestructura crítica de la nación y, por ende, a la seguridad nacional.

De esta manera, definir lo que se entendía por propaganda terrorista, por interferencia significativa con la infraestructura crítica, así como limitar las funciones del CSIS y de las demás agencias de inteligencia (Metcalf, 2017) fueron elementos sustanciales para garantizar el derecho a las libertades de expresión y de participación de aquellos que se oponían a la construcción de oleoductos y para no ser considerados disidentes.

Ya para mediados de 2019, la *Bill C-59* no era suficiente para limitar la vigilancia, las facultades de intervención, uso, manejo y retención de información del CSIS y del Communications Security Establishment,²⁸ tampoco para restringir la inmunidad al personal del CSIS, instituciones que infringían la libertad de expresión y la privacidad. Por consiguiente, la *Bill C-59* fue considerada como el instrumento que legalizó las acciones emprendidas por el gobierno de Harper.

Es preciso señalar que, paralelamente a las circunstancias que rodearon la ambigüedad de la *Bill C-59*, Justin Trudeau calificó las auditorías a las organizaciones de beneficencia como acoso político. De manera que, poco después de haber asumido el cargo de primer ministro, el propio Trudeau instruyó revisar las actividades políticas permitidas para estas asociaciones por la *Charity Law* o Ley de Caridad (Linnitt, 2015).

Al tomarse en cuenta las aportaciones de las ONGA a la política ambiental, pues estas agrupaciones son fundamentales para recrear espacios de gobernanza horizontal y debate público, en los cuales el flujo de ideas e información debe circular libremente sin contención alguna por parte del Estado, se dio paulatino fin a las auditorías.

Ahora bien, pese a la reducción paulatina de éstas, las que estaban en curso se mantuvieron y a finales de la primera gestión de Justin Trudeau se difundió que la suspensión de las auditorías se debía a que durante la campaña electoral de 2015 el primer ministro liberal había recibido fondos de asociaciones estadounidenses que formaban parte del movimiento antipetróleo (Corbella, 2019); sin embargo, todo eso se daba a conocer al mismo tiempo

²⁸ Centro de Seguridad de las Comunicaciones.

en que Trudeau manifestaba una inclinación gradual en favor de la construcción de oleoductos para así incrementar la capacidad de transporte del petróleo, con el fin de reforzar la posición canadiense en el mercado mundial de exportación de energéticos.

APOYO A LOS OLEODUCTOS

Durante su primera campaña electoral, uno de los puntos álgidos de la agenda de Justin Trudeau fue la reincorporación de Canadá a la política climática internacional. De este modo, se propuso emprender una estrategia energética compatible con dicha política, que no afectara el entorno natural y las condiciones de vida de los canadienses. Entre las promesas se plantearon reducir las emisiones al 30 por ciento para 2050, establecer un impuesto al carbono, disponer de recursos derivados de los oleoductos para energías alternativas y eliminar los subsidios a los recursos fósiles (Struzik, 2012).

Posteriormente, a pesar de las enmiendas legislativas para restaurar la confianza de la ciudadanía en las evaluaciones de impacto ambiental a los proyectos de los oleoductos, lo cierto es que apoyar la construcción y extensión de estos últimos ocasionó movilizaciones y críticas que se extenderían a lo largo del primer periodo de Trudeau.

Previamente a su campaña electoral, el primer ministro manifestó estar interesado en el proyecto de expansión del oleoducto Trans Mountain, y asimismo apoyó la ampliación de la línea tres del oleoducto Enbridge Northern Gateway, la construcción del oleoducto Energy East, y meses después de llegar al gobierno externó abiertamente su complacencia respecto de la propuesta de Donald Trump para retomar la construcción del oleoducto Keystone XL.

Al inicio de su mandato, los oleoductos Enbridge Northern Gateway, Energy East, y la aprobación del gobierno federal para la construcción del oleoducto Trans Mountain, ocasionaron una serie de protestas, marchas, demandas legales y manifestaciones que se prolongarían a lo largo de todo su primer periodo gubernamental (2015-2019). El movimiento de resistencia que integró a ambientalistas y Primeras Naciones dentro y fuera de Canadá se extendió —de la misma manera que ocurrió durante las administraciones de Harper— en los diferentes niveles: local, nacional, transnacional e internacional, gracias a los nexos globales entre activistas.

Tras emprender nuevamente el recuento de los riesgos e impactos ambientales por los posibles derrames y por las técnicas de extracción de petróleo de las arenas bituminosas, y de señalar repetidamente sus efectos nocivos para la salud de las personas, las ONGA afirmaban que la política del gobierno liberal no iba a permitir reducir las emisiones contaminantes del país en el futuro. Por ello, los grupos ambientalistas canadienses insistieron en la descarbonización de la economía, para lo que se hacía necesario restringir la extracción de petróleo.

Pese a lo anterior, la postura de Trudeau fue la de persistir en explorar la posibilidad de hacer compatibles el desarrollo económico y la protección ambiental, mediante la adopción de las políticas y regulaciones pertinentes. Bajo esa lógica, los oleoductos no sumarían al cambio climático, se evitarían los derrames de hidrocarburos y, al mismo tiempo, podría extraerse más petróleo de las arenas bituminosas, facilitándose su comercialización en los mercados externos (Austen, 2016).

Dado el alcance en otros países del movimiento antipetróleo, así como de las iniciativas por evitar su importación por causas climáticas, enmendar la legislación y procurar una política en el ámbito del desarrollo sostenible daba cuenta de una gobernanza ambiental distinta; no obstante, la pretendida ecuanimidad y las posibles causas conducentes de tal política continuaron enfrentando al gobierno federal con los ambientalistas, e incluso con los grupos propetróleo, por la falta de una postura definida.

Para el grupo propetróleo, la *Bill C-69 (Impact Assessment Act)*, así como la posibilidad de implementar acciones para disminuir la aportación de las emisiones de Canadá al cambio climático, aunadas a las medidas establecidas para proteger los ecosistemas canadienses, eran elementos que podrían representar un obstáculo para la industria petrolera, y de manera particular para la de la provincia de Alberta. Por otra parte, para los ambientalistas las acciones en favor de los oleoductos daban cuenta de que Trudeau en realidad adoptaba la política económica y energética de Harper (Gillis, 2018).

De esta forma, la prohibición al tráfico de tanques de petróleo en la costa Norte de Columbia Británica (Burgmann, 2015), que vulneraba el proyecto de Enbridge Inc. —el cual fue cancelado en 2016 para evitar impactos ambientales, particularmente al Bosque Lluvioso del Gran Oso— no fue percibida como parte de una preocupación ambiental genuina del gobierno federal, sino como el resultado de un veto impuesto por el Poder Judicial por pretender intervenir en los derechos colectivos de los pueblos originales.

A finales del primer periodo de Trudeau, en 2019, en un ambiente de acuerdos y desacuerdos, por un lado se observaba que una política encaminada a buscar la prosperidad económica sin dejar atrás la protección ambiental no era necesariamente una idea inviable si se pensaba en que la transición hacia el uso de las energías alternativas es un proceso paulatino, que lleva tiempo.

Por otro lado, la utilización de fondos públicos para la construcción del oleoducto Trans Mountain y la posibilidad de que se pusiera en marcha el Keystone XL eran elementos que mostraban que no se seguía el camino adecuado, dadas las consecuencias que podrían derivar para el medioambiente y para el bienestar humano.

Conclusiones

En Canadá, el movimiento ambientalista es un actor político de importancia en la dinámica de la gobernanza ambiental. Su activismo da cuenta de los intereses que conllevan las políticas del gobierno en el nivel federal. También muestra las características que tal gobernanza adopta en medio de las contradicciones entre sus actores, las políticas y las regulaciones, y ha contribuido a la percepción que desde fuera se tiene de este país en materia de protección ambiental.

Las coaliciones que se forman entre las ONGA, los grupos representativos de las Primeras Naciones, así como algunos científicos y miembros independientes de la sociedad civil, les proporciona mayor influencia en los ámbitos provincial, nacional, transnacional e internacional.

La postura de los ambientalistas en favor de la protección ambiental y en contra de los oleoductos se fundamentó en la vulneración gubernamental de los derechos al medioambiente sano, a la salud y a las libertades de expresión y participación. Aspectos que durante el gobierno de Stephen Harper se expresaron en la desregulación ambiental, la vigilancia y las auditorías a las ONGA, las detenciones de activistas y en la identificación de los ambientalistas como grupos terroristas, lo cual convirtió a la gobernanza ambiental federal en un proceso verticalizado.

Para Trudeau, las medidas adoptadas por Harper y la oposición a los oleoductos por los posibles impactos locales y globales se convirtieron en un

dilema en vísperas de su campaña electoral de 2019, por lo que buscó armonizar los intereses económicos con los de los ambientalistas. Ahora bien, para un país dependiente de la extracción de recursos naturales, en particular del petróleo y del gas, transitar hacia una economía de bajo carbono es un reto difícil de cumplir, tanto más o igual que sostener una postura en favor del grupo propetróleo o de los ambientalistas, así que, lejos de armonizar, las acciones emprendidas generaron incertidumbre, a pesar de que es cierto que abrieron el espacio a un proceso de gobernanza horizontal mediante la apertura a la participación de los ambientalistas.

Fuentes

AUSTEN, IAN

2016 “Justin Trudeau Approves Oil Pipeline Expansion in Canada”, *The New York Times*, en <<https://www.nytimes.com/2016/11/29/world/canada/canada-trudeau-kinder-morgan-pipeline.html>>, consultada en mayo de 2020.

BABAD, MICHAEL

2012 “Joe Oliver Taints All with Talk of Environmentalists, Radicals”, *The Globe and Mail*, en <<https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/top-business-stories/joe-oliver-taints-all-with-talk-of-environmentalists-radicals/article4085710/>>, consultada en febrero de 2020.

BAGLEY, KATHERINE

2014 “Harper Govt. Makes Moves to Silence Canada’s Lead Environmental Groups”, *Inside Climate News*, en <<https://insideclimatenews.org/news/20140214/harper-govt-makes-moves-silence-canadas-leading-environmental-groups>>, consultada en febrero de 2020.

BURGMANN, TAMSYN

2015 “Justin Trudeau Unveils Liberals’ Environmental Platform”, *The Star*, en <<https://www.thestar.com/news/canada/2015/06/29/justin-trudeau-unveils-liberals-environmental-platform.html>>, consultada en mayo de 2020.

CORBELLA, LICIA

- 2019 “Corbella: Krause Questions Why Trudeau Changed Charity Laws for Activists”, *Calgary Herald*, en <<https://calgaryherald.com/news/local-news/corbella-krause-questions-why-trudeau-changed-charity-laws-for-activists>>, consultada en marzo de 2020.

ECOJUSTICE

- 2012 “Analysis: What Bill C-38 Means for the Environment”, *West Coast Environmental Law*, en <<http://www.blackoutspeakout.ca/cms/uploads/budget-bill-top-10.pdf>>, consultada en mayo de 2020.

GATEHOUSE, JONATHON

- 2019 “Did the *Bloc Québécois* Really Kill the Energy East Pipeline?” Canadian Broadcasting Company, en <<https://www.cbc.ca/news/politics/bloc-quebecois-pipeline-fact-check-1.5306970>>, consultada en junio de 2020.

GILLIS, DAMIEN

- 2018 “Justin Trudeau’s Two-faced Climate Game”, *The New York Times*, en <<https://www.nytimes.com/2018/05/02/opinion/trudeau-climate-kinder-morgan-pipeline.html>>, consultada en mayo de 2020.

HOEKSTRA, GORDON, PETER O’NEIL, DERRICK PENNER y ROB SHAW

- 2015 “Northern Gateway Pipeline Approved by Harper Government”, *Vancouversun*, en <<http://www.vancouversun.com/business/Northern+Gateway+pipeline+approved+Harper+government+with+video/9947588/story.html>>, consultada en mayo de 2020.

JACQUES, LESLIE

- 2017 “What the U.S Environmental Movement, Poised to Battle Trump, Can Learn from Canadian’s Long Struggle against Stephen Harper”, *The National Magazine of the Sierra Club*, en <<https://www.sierra-club.org/sierra/green-life/what-us-environmental-movement-poised-battle-trump-can-learn-canadians-long>>, consultada en marzo de 2020.

LEAHY, STEPHEN

2013 “Canada’s Environmental Activists Seen as ‘Threat to National Security’”, *The Guardian*, en <<https://www.theguardian.com/environment/2013/feb/14/canada-environmental-activism-threat>>, consultada en febrero de 2020.

LINNITT, CAROL

2015 “Trudeau Instructs Minister of National Revenue to Free Charities from Political Harassment”, *The Narwhal*, en <<https://thenarwhal.ca/trudeau-instructs-minister-finance-free-charities-political-harassment/>>, consultada en mayo de 2020.

MCCARTHY, SHAWN

2015 “‘Anti-Petroleum Movement’: A Growing Security Threat to Canada, RCMP Say”, *The Globe and Mail*, en <<https://www.theglobeandmail.com/news/politics/anti-petroleum-movement-a-growing-security-threat-to-canada-rcmp-say/article23019252/>>, consultada en mayo de 2020.

MCDONALD, LAURA

2013 “Crimes against Ecology. Is the Harper Government Guilty? You Be the Judge”, *Alternatives Journal. Canada’s Environmental Voice*, en <<https://www.alternativesjournal.ca/policy-and-politics/crimes-against-ecology>>, consultada en febrero de 2020.

METCALF, KEVIN

2017 “National Security Acts —Like Pop Acts— Require All the Right Notes”. *Canadian Journalists for Free Expression*, en <https://www.cjfe.org/national_security_acts_like_pop_acts_require_all_the_right_notes>, consultada en mayo de 2020.

PARIS, MAX

2012a “Attack on ‘Radicals’ Sign of Tougher Federal Strategy”. *Canadian Broadcasting Company*, en <<https://www.cbc.ca/news/politics/attack-on-radicals-sign-of-tougher-federal-strategy-1.1137272>>, consultada en febrero de 2020.

2012b “Environment Group Testifies on Charities’ Tax Status”. Canadian Broadcasting Company, en <<https://www.cbc.ca/news/politics/environment-group-testifies-on-charities-tax-status-1.1189992>>, consultada en mayo de 2020.

PARTIDO CONSERVADOR

2008 “The True North Strong and Free. Stephen Harper’s Plan for Canadians”, en <https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents_staticpost/cearef_21799/83869/Part_5.pdf>, consultada en febrero de 2020.

PARTIDO LIBERAL

2015 *Real Change. A New Plan for Canada’s Environment and Economy*, en <<https://www.liberal.ca/wp-content/uploads/2015/08/A-new-plan-for-Canadas-environment-and-economy.pdf>>, consultada en marzo de 2020.

PATTERSON, BRENT

2017 “Trudeau Supports Trump on Keystone XL Pipeline”. *The Council of Canadians*, en <<https://canadians.org/analysis/trudeau-supports-trump-keystone-xl-pipeline>>, consultada en mayo de 2020.

PUBLIC SAFETY CANADA

2020 “Canada’s Critical Infrastructure”, en <<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrtr/crtcl-nfrstrctr/ci-iec-en.aspx>>, consultada en marzo de 2020. Gobierno de Canadá.

RAMÍREZ ORTIZ, DIANA y JUAN RAMÍREZ MARÍN

2014 *Derecho ambiental y desarrollo sustentable*. Ciudad de México: Porrúa.

SACRED TRUST INITIATIVE

2020 “Trans Mountain Expansion (TMX) Concerns”, en <<https://twnsacredtrust.ca/concerns/>>, consultada en junio de 2020.

SALOMON, EVAN y KRISTEN EVERSON

2014 “7 Environmental Charities Face Canada Revenue Agency Audits”. Canadian Broadcasting Company, en <<https://www.cbc.ca/news/>>

politics/7-environmental-charities-face-canada-revenue-agency-audits-1.2526330>, consultada en febrero de 2020.

SORENSEN, CHRIS

2015 “Stephen Harper: Oil’s Worst Enemy”. *Macleans’s*, en <<https://www.macleans.ca/politics/ottawa/stephen-harper-oils-worst-enemy/>>, consultada en febrero de 2020.

SPARROW, THOMAS

2014 “¿Por qué es tan polémico el oleoducto Keystone que unirá a Estados Unidos y Canadá?”. *BBC News*, en <https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140415_eeuu_keystonexl_oleoducto_qanda_tsb>, consultada en febrero de 2020.

STRUZIK, EDWARD

2012 “Oh Canada: the Government’s Broad Assault on the Environment”, *The Guardian*, en <<https://www.theguardian.com/environment/2012/jul/02/canada-government-assault-environment>>, consultada en febrero de 2020.

TSAO, DORA, ZARIA STOFFMAN y GEORGIA LLOYD-SMITH

2015 “Tax Audits of Environmental Groups: The Pressing Need for Law Reform”, en <http://www.elc.uvic.ca/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Tax-Audits-of-Environmental-Groups_2015Mar25.pdf>, consultada en mayo de 2020. Environmental Center, University of Victoria.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

2017 *Introduction to Environmental Governance*. Ginebra: UNEP.